

Ficheros sobre terrorismo. Informe 0290/2005.

La consulta plantea diversas cuestiones relacionadas con la aplicación de lo establecido en la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. En particular, la consulta se refiere a los ficheros creados por la entidad consultante en que se incluyan los datos de sus clientes, a fin de verificar si los mismos se corresponden con las personas a las que se refiere la mencionada Ley 12/2003.

El artículo 1.1 de la Ley 12/2003 dispone que “Con el fin de prevenir las actividades de financiación del terrorismo, son susceptibles de ser bloqueadas, en los términos previstos en esta Ley, las cuentas, saldos y posiciones financieras, así como las transacciones y movimientos de capitales, aun ocasionales, y sus correspondientes operaciones de cobro, pago o transferencia, en las que el ordenante, emisor, titular, beneficiario o destinatario sea una persona o entidad vinculada a grupos u organizaciones terroristas, o cuando se hubiera realizado la transacción, movimiento u operación con motivo u ocasión de la perpetración de actividades terroristas, o para contribuir a los fines perseguidos por los grupos u organizaciones terroristas”.

El artículo 7 delimita los sujetos en que podrá concurrir la condición mencionada en el artículo 1.1, al señalar que la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo podrá considerar como tales las mencionadas en el propio precepto.

Por otra parte, el artículo 4.1 de la Ley impone a los sujetos obligados, entre otras obligaciones, las de Examinar con especial atención cualquier operación que, por su cuantía o por su naturaleza, pueda estar particularmente relacionada con la financiación de actividades terroristas” (apartado c), “Comunicar a la Comisión de Vigilancia, por iniciativa propia, cualquier hecho u operación respecto del que existan indicios racionales de que está relacionado con la financiación de actividades terroristas, así como cualquier solicitud o petición que reciban en la que el ordenante, emisor, titular, beneficiario o destinatario sea una persona o entidad vinculada a organizaciones terroristas o exista algún indicio racional de que esté relacionado con ellas, o respecto a las que la Comisión de Vigilancia haya adoptado alguna medida” (apartado d), “No revelar ni al cliente ni a terceros que se ha transmitido información a la Comisión de Vigilancia con arreglo a lo dispuesto en los párrafos b), d) y e) anteriores, o que se está examinando alguna operación en los términos del párrafo c)” (apartado g) y “Establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación, a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con personas y entidades vinculadas a organizaciones terroristas” (apartado h).

Además, dispone el artículo 4.2 que “En todo caso, las personas y entidades enumeradas en el apartado anterior estarán sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y a los demás deberes que sean de aplicación de acuerdo con lo señalado en la Ley 19/1993”, que impone en su artículo 3.1 el deber de identificación de los sujetos intervinientes en las operaciones, en

los términos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley.

De este modo, el tratamiento al que se refiere la consulta tendría por objeto facilitar el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 4.1 c) de la Ley 12/2003, garantizando que pueda conocerse quiénes de entre los clientes de la entidad cumplirían los requisitos establecidos en el artículo 7 de la propia Ley, dándose además cumplimiento con la creación del fichero a la obligación de identificación prevista en el artículo 3.1 de la Ley 19/1993.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y siempre que la finalidad que justifica la creación del fichero sea única y exclusivamente, facilitar el cumplimiento de las funciones previstas en la Ley 12/2003, de forma que únicamente el órgano de control que se constituye con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.1 h) de la propia Ley tenga acceso y utilice los datos que la conforman con la finalidad de proceder al estudio detallado de las operaciones realizadas a fin de comunicar a la Comisión aquellas en que se produzca algún tipo de circunstancia que imponga dicha comunicación en los términos previstos en la Ley 12/2003, el tratamiento de dichos datos se encontraría amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con lo exigido por las Leyes 12/2003 y 19/1993.

En consecuencia, y con las cautelas que se ha indicado, sería posible proceder a la creación del fichero o base de datos al que se ha hecho referencia.

Dicho lo anterior, el fichero se encontrará plenamente sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, debiendo procederse a su notificación, a fin de proceder a la inscripción del mismo en el Registro General de Protección de Datos. Al propio tiempo, deberán implantarse sobre el fichero las medidas de seguridad, que cuando menos habrán de ser las de nivel medio previstas en el Real Decreto 994/1999, habida cuenta de la actividad financiera desarrollada por la consultante y de la vinculación del fichero a las obligaciones de aquélla en virtud del ejercicio de dicha actividad.

En cuanto a la conservación de los datos, el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

Por este motivo, los datos deberían ser conservados en el fichero en tanto ello fuera necesario para el examen y, en su caso, comunicación a la Comisión de las operaciones sometidas a lo dispuesto por la Ley 12/2003, pudiendo ello implicar el tratamiento de los datos mientras persista la relación existente entre el sujeto y la entidad consultante.

No obstante, debe reiterarse que la utilización de los datos debería quedar restringida a los órganos de control creados por la entidad para el cumplimiento de la Ley 12/2003.

En cuanto al cumplimiento del deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, así como en relación con el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el artículo 4.1 g) de la Ley 12/2003 dispone que las entidades obligadas están sometidas al deber de “No revelar ni al cliente ni a terceros que se ha transmitido información a la Comisión de Vigilancia con arreglo a lo dispuesto en los párrafos b), d) y e) anteriores, o que se está examinando alguna operación en los términos del párrafo c)”

Esta Agencia ha venido indicando que esta prohibición legal eximirá a los sujetos obligados de dar cumplimiento al deber previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el tratamiento y la comunicación efectuados al amparo de lo dispuesto en la Ley 12/2003. Del mismo modo, la prohibición establecida en dicha norma impediría a las personas o entidades obligadas atender las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

En este sentido, recuerda el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, tras reconocer la existencia de un derecho fundamental y autónomo a la protección de datos de carácter personal, que “la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental. Los derechos fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido”.

En el presente supuesto, la restricción expresamente impuesta por el legislador a la posibilidad de revelación del estudio y comunicación de las operaciones a las que se refiere el artículo 4 de la Ley 12/2003 implicará una limitación al haz de derechos y facultades impuesto por la Ley Orgánica 15/1999 que cumplirá lo dispuesto en la doctrina constitucional citada, respetándose lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y el propio derecho fundamental.

Por este motivo, no será preciso dar cumplimiento en este supuesto al deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 ni otorgar al interesado el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los ficheros creados en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2003, de modo que cabrá rechazar las pretensiones ejercitadas en este sentido, invocándose, a fin de justificar la denegación, lo dispuesto en el artículo 4.1 g) de la Ley 12/2003.